

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: ***

ACTOR: ***

AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARÍA DE
FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES.

MAGISTRADO PONENTE: ALFONSO ROMÁN QUIROZ

Aguascalientes, Aguascalientes, siete de diciembre de dos
mil dieciocho.

VISTOS para resolver en definitiva los autos del Juicio
de Nulidad número ***,

RESULTANDO

I.- Mediante escrito presentado en Oficialía de Partes del
Poder Judicial del Estado, el *veintitrés de marzo de dos mil dieciocho*, remitido
a esta Sala Administrativa del Estado al día siguiente hábil, ***,
demandó la nulidad de los actos administrativos que le atribuye a la
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES; mismos que precisó en los siguientes términos:

**“II. RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
QUE SE IMPUGNA**

El crédito fiscal que se desprende del comprobante de pago a la
propiedad raíz del año 2018 del bien inmueble ubicado en *** en el municipio de
Aguascalientes, Ags; por la cantidad de \$361.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y
UN PESOS 00/100 M.N. de fecha 16 de marzo de 2018 realizado ante el H.
AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.”

II.- El seis de junio de dos mil dieciocho, se admitió trámite la
demanda planteada por la actora; pronunciándose sobre las pruebas
ofrecidas en términos del propio auto y se ordenó el emplazamiento
respectivo a la autoridad fiscal demandada.

III.- Mediante proveído del *diecisiete de julio del dos mil
dieciocho*, se tuvo a la autoridad por contestando la demanda; se

admitieron las pruebas ofrecidas por su parte en términos del propio acuerdo y se ordenó correr trasladado al accionante para que ampliara su demanda.

IV.- Por acuerdo de *veintisiete de agosto de dos mil dieciocho*, se tuvo a la parte actora formulando ampliación de demanda, admitiéndole las pruebas ofrecidas.

V.- Mediante proveído del *dieciocho de octubre de dos mil dieciocho*, se tuvo a la demandada contestando la ampliación de demanda, se admitieron las pruebas ofrecidas y se señaló fecha para la celebración de la audiencia de juicio.

VI.- En la audiencia de juicio celebrada el *siete de diciembre de dos mil dieciocho*, se desahogaron las pruebas admitidas a las partes, se agotó el periodo de alegatos, y se citó el asunto para sentencia definitiva; misma que hoy se dicta; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 51, párrafo segundo y 52, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 33 A y 33 F, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado y artículos 1º, primer párrafo y 2º fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, en virtud de que se impugna una resolución administrativa emitida por una autoridad fiscal del Municipio de Aguascalientes, que a dicho del actor, le afecta en su esfera jurídica.

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se acredita con la DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ (Predial), cuenta predial número *******, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, emitida por la Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, el *primero de marzo de dos mil dieciocho*.

Prueba que obra de la foja 26 a 29 de los autos, por haberse acompañado a la contestación de demanda, siendo una DOCUMENTAL PÚBLICA que al ser expedida por servidor público en



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE 0650/2018

ejercicio de sus funciones, merece pleno valor probatorio de conformidad al artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes por disposición de sus numerales 3º y 47.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, último párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, se procede al estudio de la causal de improcedencia invocada por la demandada, según la fracción I del artículo 26, de la Ley en cita, la que de resultar procedente, provocaría el sobreseimiento del presente juicio, impidiendo el análisis de los conceptos de nulidad expresados por la parte demandante.

Aduce la referida demandada que la parte actora no acredita su **interés jurídico** toda vez que no señala debidamente cual es la afectación sufrida, pues lo expresado en los conceptos de nulidad, no es suficiente para demostrar tal afectación y por tanto para acreditar su interés jurídico.

La causal de improcedencia invocada es **INATENDIBLE**, toda vez que la parte demandada manifiesta cuestiones que atienden a la supuesta inoperatividad de **los conceptos de nulidad** y no a una **causal de improcedencia**, por lo que sus argumentos en todo caso, habrán de ser valorados cuando se entre al estudio de los conceptos de nulidad, de ahí que la causal invocada sea inatendible.

Agrega que conforme al artículo 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2018, prevé que, una vez que el contribuyente se hizo sabedor de la base del impuesto predial y el importe a pagar, tuvo la oportunidad de solicitar a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, la Determinación del Impuesto a la Propiedad Raíz, así como también se le da la oportunidad de inconformarse y manifestarlo de acuerdo a lo

establecido en el referido artículo, sin embargo, omitió realizar el trámite respectivo, por lo que en ningún caso se le afectaron sus intereses.

Resulta inexacto que deba decretarse el sobreseimiento porque existe falta de interés jurídico de la parte actora, ya que es optativo para el interesado interponer el recurso administrativo o intentar las vías judiciales correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado y 10 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes; siendo claro que la parte actora al interponer la demanda de estudio, decidió intentar la segunda de las opciones.

Complementariamente, si la parte actora manifestó en su demanda el desconocimiento del acto administrativo impugnado, se presume que el particular no tuvo conocimiento del formato referido en el citado artículo 29 de la Ley de Ingresos, ya que la entrega de éste, es potestativo para la SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, por lo que no necesariamente debe ser entregado a los particulares para que éstos se inconformen en sede administrativa.

Asimismo, la Determinación exhibida por la propia autoridad demandada (foja 26 a 29 de los autos), se encuentra dirigida a nombre del demandante y coincide con la cuenta predial y ejercicio fiscal impugnado, con lo que se acredita el interés jurídico de la parte actora para comparecer en juicio.

De ahí que no se decrete el sobreseimiento del presente juicio como lo solicita la autoridad demandada.

CUARTO. Al no haberse actualizado causal de improcedencia, se procede el estudio de los conceptos de nulidad expresados por la parte actora; mismos que no se reproducen en obvio de repeticiones; sin que se haga necesaria su transcripción por no ser un requisito formal de las sentencias.

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por la demandada; sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste,



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE 0650/2018

lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

QUINTO.- ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD

En el PRIMER concepto de nulidad del escrito inicial de demanda, aduce el actor en esencia que son ilegales los actos impugnados ya violan la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 Constitucional, en relación con el artículo 4º, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado, ya que la autoridad no justifica ni acredita de manera alguna el origen del ilegal cobro, sin haber sido requerido previamente del pago de la obligación principal, toda vez que no se le notificó de manera alguna que tuviera un adeudo.

Agrega, que resulta insostenible que se le imponga una cantidad tan exorbitante respecto a un crédito que se encuentra mal fundamentado y de ninguna manera motivado, puesto que se realiza un procedimiento interno administrativo para establecer dichos montos, sin que se le hubiese comunicado la existencia del mismo, es decir, que la base lógica de su demanda de nulidad es en sí, el hecho de que desconoce la naturaleza u origen del cobro que se menciona.

Finalmente, refiere que el acta mediante la cual se le notifica la existencia del supuesto adeudo, carece de varios requisitos, ya que no contiene firma autógrafa que ordena el adeudo, por lo que desconoce si verdaderamente la autoridad ordenó tales actuaciones.

Los argumentos de estudio son **INOPERANTES**.

En primer término, resultan **inoperantes**, porque en el juicio contencioso administrativo, existe la figura de la ampliación de demanda, en aquellos casos en los que el demandante afirma desconocer el acto o resolución, por lo que se requiere a la autoridad demandada por la exhibición de dichas documentales, a fin de estar en aptitud de expresar los conceptos de nulidad una vez conocidos los fundamentos y

motivos de dicho acto administrativo, tal y como lo establece el artículo 31, párrafo tercero, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que dispone:

“ARTICULO 31.- Cuando se impugne una negativa ficta, el actor tendrá derecho de ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la misma.

“Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue de manera ilegal se estará a lo siguiente:

“II.- Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo, así lo expresará en la demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, la notificación de éste o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir en ampliación de demanda dentro de los quince días siguientes a aquél en que los conozca; y

“”

En la especie, la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, al formular contestación de demanda, exhibió la Determinación del Impuesto a la Propiedad Raíz de cuenta predial ***, sin que acompañara su respectiva constancia de notificación.

Por tanto, si bien es cierto que la Determinación del Impuesto a la Propiedad Raíz impugnada, no fue notificada conforme a derecho y con antelación de este juicio de nulidad, no obstante, el sólo hecho de no haber sido notificado antes del juicio los documentos referidos, no impide al accionante que en ampliación de demanda hubiere controvertido el contenido de aquellos actos que dijo desconocer al momento en que presentó su demanda.

En este contexto, se dice que no se afectan sus defensas, porque es en ampliación de demanda, donde tiene la oportunidad de esgrimir sus argumentos para combatir el acto impugnado —Determinación del Impuesto a la Propiedad Raíz— colmando así, su derecho de oportunidad de defensa tutelado en nuestra carta magna.

Consecuentemente, es evidente que no se dan los supuestos de ilegalidad a que se refiere el artículo 61, fracción II, de la Ley



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE 0650/2018

del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes¹; pues se insiste, la falta de exhibición de la constancia de notificación de la resolución impugnada, **no se traduce en un perjuicio que afecte al particular**, pues al haber exhibido la demandada junto a su contestación la constancia del acto impugnado — Determinación del impuesto a la Propiedad Raíz²—, es en ampliación de demandada donde está en aptitud de verter conceptos de nulidad en contra de dicho acto; respetando así, su garantía de audiencia.

Siendo que en el caso particular, por auto de fecha *veintisiete de agosto de dos mil dieciocho*, se tuvo a la actora **formulando ampliación de demanda** con lo cual se corrobora que estuvo en aptitud para expresar los conceptos de nulidad en relación con la determinación del impuesto a la propiedad raíz. De ahí que devenga **INOPERANTE** su argumento.

Por último, en lo relativo a que el acta mediante la cual se le notifica la existencia del supuesto adeudo, no contiene la firma autógrafa de la autoridad que lo expide, por lo que desconoce si verdaderamente la autoridad ordenó tales actuaciones; debe estimarse que deviene **igualmente inoperante** tal argumento, toda vez que como quedó establecido en líneas que anteceden, de las constancias que obran en autos, no existe acta de notificación que pueda ser materia de estudio como lo pretende el demandante, asimismo, la documental que adjunta el actor, es un estado de cuenta, siendo que la determinación de impuesto a la propiedad raíz fue acompañada a la contestación por la parte demandada, manifestado conceptos de nulidad en contra de la misma, mismos que serán estudiados más adelante.

En el **SEGUNDO** concepto de nulidad del escrito inicial de demanda, señala el accionante que los adeudos y cobros impugnados,

¹ “**ARTICULO 61.-** Serán causas de anulación de una resolución o de un procedimiento administrativo: [...]

II.- La omisión o incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir la resolución o el acto;...”

² Véase fojas 26 a la 28 de los autos.

de origen y fondo son ilegales, porque tales créditos fiscales no establecen las pautas, metodología, técnicas y condiciones bajo los cuales fueron calculados o bien originados.

Adicionalmente, indica que si bien las contribuciones a la propiedad se encuentran previstas en la legislación de la materia, la Ley de Ingresos debe prever que el importe del impuesto deberá ser conforme al valor catastral, sin embargo, el principio de proporcionalidad no se ve reflejado en la norma, dado que el impuesto a la propiedad raíz no cumple con los principios de proporcionalidad, certeza, generalidad, equidad y uniformidad, porque se limita a señalar la autoridad la cuantía del pago, sin señalar el origen de éste o el valor económico actualizado.

Que no se cumple con la proporcionalidad y equidad porque no se hace referencia al valor del predio y no se toma en cuenta la capacidad económica, o bien el valor real de los inmuebles, ni tampoco el valor por metro cuadrado de construcción, sin siquiera señalar el tipo de material con que se encuentra edificada su construcción.

Que tales principios no son previstos por el artículo 44 de la Ley de Hacienda del Municipio, por lo que dicho precepto es inconstitucional, dado que no atiende al principio de proporcionalidad, ya que la autoridad se limita a expresar la cantidad de a pagar del impuesto de su propiedad, sin referir cuál es el valor que catastro refiere y bajo qué lineamientos se fijan los mismos.

Y que en cuanto a la *equidad* del impuesto, que se refiere a que a todos los gobernados deben otorgarse las mismas bases y características de individualización del impuesto, pero la autoridad se limita a señalar como base el valor catastral, sin atender a circunstancias económicas, sociales e incluso de depreciación de su propiedad.

Son **INFUNDADOS** e **INOPERANTES** los argumentos contenidos en el concepto de nulidad de estudio.

En primer término, resultan **INFUNDADOS**, porque contrario a lo expresado por el actor, la demandada si expresa las bases y fundamentos para determinar el impuesto impugnado; así, la autoridad



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE 0650/2018

fiscal demanda en la resolución impugnada (foja 26 a 29 de los autos) establece que la base del tributo lo es:

- Valor catastral del Bien Inmueble aplicable para el ejercicio fiscal del año 2018, en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, inciso C y artículo 21, fracciones III, XIV, XX, XXVIII Y XXIX de la Ley de Catastro del estado de Aguascalientes.

- Valor unitario metro cuadrado de terreno \$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100) por 75.00 Metros Cuadrados de superficie de terreno, con valor total de terreno \$112,500.00 (CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); Valor unitario metro cuadrado de construcción \$2,075.00 (DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), por 75.00 metros cuadrados de superficie de construcción, con valor total de construcción \$155,625.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).

- El valor catastral asignado por el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes al inmueble, en cantidad de \$268,125.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.);

- La tasa que prevé el artículo 27, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del año 2018 en razón de 1.46 al millar anual, para predios con construcción;

- Igual a Impuesto total a cargo \$391.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.);

- Total Impuesto Topado \$401.00

Por lo que contrario a lo que aduce el demandante, en la Determinación del Impuesto a la Propiedad Raíz que exhibió la demandada al dar contestación a la demanda, se aprecian las pautas, métodos, técnicas y condiciones bajo los cuales fue calculado el impuesto a su cargo, así como las circunstancias económicas y sociales (impuesto topado).

Ahora, bien, en relación a lo dicho por el actor en el sentido de que se vulneran los principios de certeza, generalidad, equidad y uniformidad, en razón de que la autoridad se limita a señalar la cuantía del pago sin señalar su origen; el argumento deviene **INOPERANTE**, porque el actor solamente emite afirmaciones genéricas en torno a dichos tópicos sin puntualizar porque se transgrede cada uno de los principios, amén que conforme quedó estipulado la autoridad en cada una de las determinaciones que exhibió señaló la metodología o procedimiento que aplicó, para determinar el monto del impuesto a cargo del actor.

Finalmente, resulta igualmente **INOPERANTE** el argumento planteado por el demandante relativo a que el artículo 44 de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, no atiende los principios de proporcionalidad y equidad, pues en dicho argumento, la parte actora se concreta a emitir la manifestación de referencia en los términos señalados, sin que sustente la razón de su aseveración, es decir parte de meras afirmaciones que no encuentran soporte en algún razonamiento lógico jurídico que pudiera ser objeto de estudio por parte de esta autoridad.

Ahora, el artículo en mención señala literalmente lo siguiente:

“ARTICULO 44.- Será base para el pago de este impuesto, el valor catastral de los predios o de las construcciones, en su costo.

En cuanto a los predios o construcciones que no tengan valores catastrales, servirá de base el valor con que se encuentren fiscalmente empadronadas o el valor de operación del traslado de dominio que se registre, aún tratándose de ventas con reserva de dominio, si éste es mayor que aquéllos.”

No obstante, en términos del precepto legal transcrito correspondía al actor referir específicamente las razones por las que considera que el contenido de éste se aparta de la *proporcionalidad y equidad* debida y en su caso, por qué se opone a la Constitución Federal, sin que lo hubiera hecho y por ello se declara igualmente inoperante tal argumento.

Consecuentemente, los argumentos expuestos por el demandante resultan conforme a lo analizado, infundados e inoperantes,



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE 0650/2018

por lo que subsiste la validez de la Determinación del Impuesto a la Propiedad Raíz, conforme a lo dispuesto por el referido artículo 6°, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, respecto de la cual no se demostró su ilegalidad.

Por último, en el ÚNICO concepto de nulidad del escrito de ampliación de demanda, aduce la parte actora que la autoridad demandada lo deja en estado de indefensión, toda vez que la demandada fue omisa en exhibir el documento en el cual conste la determinación de cantidad líquida a pagar por impuesto y derecho de que se duele, lo que le impide que pueda formular conceptos de nulidad que ataquen el fondo de la respectiva determinación en ampliación de demanda.

El concepto de nulidad de estudio es INOPERANTE, al estar basado en una premisa falsa, toda vez que la autoridad demandada sí exhibió la resolución impugnada.

Es así porque mediante proveído de fecha *diecisiete de julio de dos mil dieciocho*, esta Sala tuvo a la autoridad demandada Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, por contestando la demanda, admitiéndole dos documentales conforme al numeral 1 de su escrito y al documento que acompañó a la misma.

Documentos que bajo el numeral 1 del capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda hizo consistir en³:

“1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la resolución determinante del crédito fiscal impugnado.”

Dicha resolución obra en el expediente a foja 26 a 29 de los autos.

De lo que se obtiene que la autoridad demandada sí exhibió la resolución impugnada y por tanto la parte actora sí se encontraba en aptitud para formular conceptos de nulidad en ampliación de demanda como en la especie sucedió.

³ Ver foja 24 del escrito de Contestación de demanda

De ahí la inoperancia de su afirmación, pues al basar su argumento en una premisa falsa, ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, resultando ineficaz su conclusión para obtener la nulidad del acto impugnado.

Al respecto, resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 108/2012, de la décima época, con número de registro: 2001825, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto dice:

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.”

También, es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia XVII.Io.C.T. J/5, de la décima época, con número de registro: 2008226, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que al rubro y texto indica:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J. 108/2012 (10ª época)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes.”

SEXTO.- Que al ser infundados e inoperantes los conceptos de nulidad expresados por la parte actora, lo que procede es reconocer la VALIDEZ de la resolución impugnada.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 60, y 62, fracción I de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, es de resolverse y se resuelve:



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE 0650/2018

PRIMERO.- La parte actora no probó su acción de nulidad.

SEGUNDO.- Se reconoce la **VALIDEZ** del acto impugnado, consistente en la DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ (Predial), cuenta predial número *******, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, emitida por la Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, el *primero de marzo de dos mil dieciocho*.

TERCERO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos los Magistrados Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz, siendo ponente el último de los nombrados, quienes conjuntamente firman ante la Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, quien autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos el diez de diciembre de dos mil dieciocho.- Conste

A continuación se estampan las firmas de los Magistrados y de la Secretaría General de Acuerdos, quien a la vez

CERTIFICA

Que las anteriores copias concuerdan fielmente con su original que obran en el expediente número ***, las que se autorizan para notificar a las partes. Va en trece páginas, a siete de diciembre de dos mil dieciocho - Doy fe

LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES